

“La conjura de Fitur”: cuatro CCAA reclaman 3.277 millones al Gobierno

FINANCIACIÓN / El socialista García-Page (Castilla-La Mancha) se alía con los populares Mazón (Valencia), López Miras (Murcia) y Moreno (Andalucía) para protestar contra la infrafinanciación de sus autonomías.

Expansión. Madrid. Valencia

La feria de turismo Fitur, que se celebra estos días en Madrid, sirvió ayer para que cuatro comunidades autónomas crearan un frente común para reclamar al Gobierno una compensación por la infrafinanciación, más allá de la prometida condonación de deuda a que podrían aspirar como *consolación* tras la promesa de la quita de 15.000 millones a Cataluña. Un barón socialista y tres populares: los presidentes autonómicos de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; de Andalucía, Juanma Moreno; Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y Murcia, Fernando López Miras, mantuvieron una minicumbre informal aprovechando que todos ellos se encontraban en la inauguración de Fitur, que presidió el Rey en Madrid. Tres presidentes del PP y uno del PSOE que escenificaron su acuerdo en que gobiernan las cuatro regiones peor financiadas.

El informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), publicado un día antes, establece una infrafinanciación anual para Andalucía de 1.409 millones de euros; de 1.148 millones para la Comunidad Valenciana; de 405 millones para la Región de Murcia, y de 315 millones para Castilla-La Mancha. Los cuatro, según dijo Moreno tras el encuentro, coinciden en la urgente nece-



El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (izda.), ayer en Fitur junto a sus homólogos Fernando López Miras (Murcia), Carlos Mazón (Comunidad Valenciana) y Juanma Moreno (Andalucía).

sidad de renovar el modelo de financiación autonómica con consenso, pero antes reclaman que el Gobierno salde la deuda anual, que llegaría a los 3.277 millones de euros.

Mazón fue el que, en declaraciones a los medios, bautizó el encuentro como “la conjura de Fitur”. Aparte de reclamar un nuevo modelo de financiación autonómica, destacó que los cuatro presidentes “estamos de acuerdo en que, en cualquier caso, antes y mientras viene un nuevo sistema de financiación, haya un fon-

do de nivelación transitorio que al menos nos iguale a los que están mucho mejor que nosotros”.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el barón socialista más discolorado y crítico con el sanchismo, incidió en que la situación presenta dos debates distintos. Por un lado, el que se tiene que abrir sobre el nuevo modelo de financiación. Y por otro, el debate sobre cómo cerrar el modelo actual una vez que “objetivamente” hay cuatro comuni-

dades infrafinanciadas. Sobre el nuevo modelo, Page consideró que habrá “diferencias” entre unas regiones y otras y deseó “la mayor suerte del mundo” a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la hora de lograr un acuerdo que prevé “difícilísimo y más con la postura de los independentistas catalanes que no se quieren sentar a la mesa a negociar”. A este respecto, el presidente murciano, López Miras, afirmó que “no es aceptable un

sistema de financiación para Cataluña a la carta, ni una condonación de la deuda”.

En este contexto, esta primera reunión de cuatro autonomías podría acabar convirtiéndose en el germen de un grupo cohesionado de reclamación sobre la financiación regional. Mazón afirmó que se ha acordado mantener un diálogo permanente entre ejecutivos y consejeros, y apuntó a que pudiera celebrarse más adelante un encuentro formal entre este grupo de autonomías, sin detallar fechas. “No

Page acusa al PSOE de estar en el “extrarradio de la Constitución” y dispara la tensión

sé si cristalizará antes o después en un encuentro más o menos formal, pero que hay una línea de trabajo conjunta, irrenunciable y prioritaria de los cuatro, lo confirmo”, concluyó el presidente valenciano. Mientras, el presidente andaluz, Juanma Moreno, urgió al jefe del Ejecutivo a articular cuanto antes ese fondo compensatorio porque “no se puede consentir ni un mes más esta situación”, enfatizando que “el Gobierno de Sánchez tiene una factura pendiente con estas comunidades”.

Page y el “extrarradio”

La alianza de García-Page con los tres barones regionales del PP coincidió ayer con un fuerte encontronazo del presidente castellano-manchego con el PSOE de Sánchez. Page, cuyas críticas han ido subiendo de tono en las últimas semanas, acusó ayer a su partido de estar “en el extrarradio de la Constitución, a punto de pisar la frontera constitucional” tras el pacto con Junts para dejar los delitos de terrorismo fuera de la amnistía. Una crítica a la que el ministro de Transportes, el controvertido Óscar Puente, replicó que es Page quien se encuentra “en el extrarradio del PSOE”. La discrepancia se hacen así cada vez más visibles entre el presidente castellano-manchego y la cúpula del PSOE, a la que ayer recordó que “el que gana a la derecha y a la extrema derecha en este país no está en ningún extrarradio. Yo gano elecciones. A ver si voy a tener que pedir disculpas por ganar elecciones”, afirmó.

Díaz abre hoy la negociación para reducir la jornada

M. Valverde. Madrid

El Gobierno comienza hoy la negociación con la patronal y los sindicatos para reducir por ley la jornada laboral semanal con el mantenimiento del salario. Sin recortarlo. Por ley, porque, como dijo ayer la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se trata de fijar en el Estatuto de los Trabajadores que la jornada laboral semanal en 2025 no pueda superar las 37,5 horas semanales. Que sea obligatoria para todas las empresas y todos los trabajadores. Es un techo máximo de tiempo de trabajo, al igual que hoy en día está en las 40

horas semanales. Es una medida dirigida a muchos sectores que emplean mano de obra intensiva. Por ejemplo, la hostelería, el comercio, la construcción, la agricultura, la limpieza o la agroalimentación. Sobre todo, son sectores con una fuerte presencia femenina. Y, por tanto, en los que las trabajadoras resultan especialmente perjudicadas.

Además, la vicepresidenta también enfoca la medida para cortar las largas jornadas laborales en sectores que pueden ser considerados como de trabajadores con elevada formación, pero que, en demasiados casos tienen

unas condiciones laborales leoninas. Por ejemplo, el sector financiero, las auditoras, las consultoras y los despachos de abogados, entre otros.

Una jornada máxima

Por todas estas razones, el Ejecutivo quiere reducir por ley, y en dos etapas, la jornada laboral desde las 40 a las 37,5 horas semanales. Primero, a 38,5, en 2024 y, en segundo lugar, a 37,5 horas semanales, en 2025. Se trata de regular un techo horario legal para todos los trabajadores, porque la jornada semanal de 40 horas está vigente desde la

década de los años ochenta del siglo pasado.

Esto no quiere decir que, mediante la negociación colectiva, las empresas no puedan adoptar otros horarios. La medida de reducir el tiempo de trabajo tiene como foco a doce millones de trabajadores que hoy en día tienen un horario superior a las 37,5 horas semanales.

Sin embargo, como dijo la vicepresidenta Díaz ya hay 1,6 millones de trabajadores, en el sector privado, y tres millones de empleados públicos, entre funcionarios y contratados laborales, que tienen una jornada de 37,5 horas se-

manales o menos. De hecho, muchas empresas y sectores de las administraciones ya no trabajan los viernes por la tarde. Y mucho menos en verano. También es verdad que la líder de Sumar está en campaña electoral ante las sucesivas citas en las urnas de este año, y ha convertido a la reducción de la jornada laboral en su medida estrella de 2024. Hay que recordar que el 18 de febrero hay elecciones gallegas; el 6 de junio, elecciones europeas, y es muy probable que antes de que acabe el año haya elecciones en el País Vasco.

Díaz también defendió la

reducción del tiempo de trabajo para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, y también para mejorar la productividad. La vicepresidenta sostiene que recortar la jornada laboral sin reducir el salario es un incentivo por sí mismo para el trabajador por la mejora de las condiciones laborales y la necesidad de hacer su tarea en menos tiempo. La patronal CEOE ya ha hecho saber que cada sector debe decir qué jornada hace, porque no se puede tomar una medida para todas las empresas. Además, cree que supone una subida implícita del salario mínimo.